

En Coyhaique, a trece de Octubre del año dos mil veintiuno.

**VISTOS:**

Con fecha catorce de Septiembre del presente año, comparece don Luis Aldo Fuentes Altamirano, chileno, pescador artesanal, domiciliado en calle Moraleda número 480, oficina 1, Coyhaique, quien deduce recurso de protección, en contra de la empresa Salmón Concesiones XI Región S.A., también llamada Salmoconcesiones XI Región S.A., de su giro, representada por don Roberto Pradenas Lizama, cuya profesión se ignora, ambos domiciliados en calle Janequeo número 160 y/o Janequeo número 236, Chonchi, Región de Los Lagos, por infracción y amenaza a sus garantías y derechos constitucionales, contempladas en el artículo 19, números 1 y 8, de la Constitución Política de la República, (no obstante no analiza ni desarrolla la primera garantía invocada) solicitando, en definitiva, *“acogerlo en todas sus partes, con costas, disponiendo, con el objeto de restablecer el imperio del derecho, que las recurridas deben poner término a la perturbación ilegal y arbitraria de los derechos de propiedad, de igualdad procesal y de igualdad ante la ley constitucionalmente garantizados y que le asisten a mi representada y que, como consecuencia de ello, deberá obligarse a la empresa Salmón Concesiones XI Región S.A., también llamada Salmoconcesiones XI Región S.A. a retirar el artefacto naval por ella instalada en la bahía de Puyuhuapi y abstenerse en lo sucesivo de ejecutar conductas que constituyan vías de hecho contrarias al imperio del derecho y que interfieran en la normal ejercicio de las actividades que mi representada realiza en sus predios y que se han visto interrumpidas e impedidas por la actuación de la recurrida.”* (SIC).

En el primer otrosí de su escrito, la recurrente individualiza tres antecedentes documentales.

Con fecha veinte de Septiembre del año 2021, se declara admisible el recurso de protección.



Evacuando el informe requerido, la recurrida, representada por el abogado don Ronald Schirmer Prieto, solicitó la declaración de inadmisibilidad del recurso, en subsidio informa, acompañando al mismo, los antecedentes que indicó en su tercer otrosí.

Con fecha 4 de Octubre del año 2021, se dictó la providencia Autos en Relación.

A la vista de la causa, alegó por el recurso, el abogado don Lorenzo Avilés Rubilar; en tanto, por la recurrida, lo hizo el abogado don Ronald Schirmer Prieto; ambos abogados alegaron telemáticamente, vía plataforma zoom.

### **Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, el recurrente fundamenta su presentación señalando, como antecedentes, que por Resolución 1146, de 06/0871998 (sic), se otorgó concesión de acuicultura a la empresa Salmón Concesiones XI Región S.A., por un área de 6,57 has., de superficie marítima para el cultivo de especies salmónidas. Asimismo, reseña que por resolución de Subsecretaría de las FFAA N° 1791], del 30/09/1999, se otorgó concesión de mar y fondo, código n° 110240, a la empresa Salmón Concesiones XI Región S.A., ubicada en seno ventisquero, al suroeste del río Pascua y adscrita al barrio n° 32 de la agrupación de concesiones de acuicultura de la Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo.

Hizo presente que en dichas concesiones, hasta el año 2013, hubo operaciones en los términos que señala el inciso segundo de la Ley de Pesca y Acuicultura 18.892, que cita, -no obstante, no señala el determinado artículo-. Agregó que después del año 2013, no ha habido operación en dicho lugar, de hecho, las balsas que existían fueron retiradas del lugar.

Sin embargo, indicó, que el día 26 de Agosto de 2021, en horas de la noche y en modo clandestino (entiende que ni siquiera contó con permiso de remolque autorizado por la Armada), se instalaron artefactos navales (estructuras metálicas flotantes) que corresponden a la parte sin malla de una balsa de cultivo de peces, sin que las



resguarde ninguna persona. Artefactos que son de propiedad de la empresa Salmones de Chile S.A.

Agregó que dichos artefactos contarían con una aparente autorización otorgada por Resolución N° 1149, del 5 de Marzo del año 2021, en virtud de la cual se concede “prórroga para reanudar las actividades y deniega solicitud de ampliación de plazo respecto de concesión de acuicultura código de centro n° 110240”, estableciendo como último día de la concesión el “31 de agosto de 2021”....“4. Deniéguese la solicitud de ampliación de plazo fortuito o fuerza mayor, presentada al amparo de lo dispuesto en el artículo 142 letra a) inciso tercero de la 18892...” (SIC).

Explicó que, al día 01 de septiembre de 2021, en la bahía de Puyuhuapi, ya no hay concesión marítima de acuicultura, ergo, no debe de haber ningún artefacto naval u otro objeto relacionado con ello en el lugar, pese a que se mantienen allí, lo que genera contaminación en la bahía, alterando el paisaje en forma violenta y profunda, amén que se convierte en basura flotando en la bahía, con el consiguiente peligro para los pescadores, operadores que realizan actividades náuticas. De hecho las estructuras están abandonadas, no se aprecia ningún guardia o sistema de seguridad.

Acerca del marco normativo, cita el inciso tercero del artículo 69, de la Ley General de Pesca y Acuicultura ( LGPA); también el artículo 141 y 142, del mismo cuerpo legal.

De otra parte, reprodujo la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en su artículo 1, 2, en sus letras c), d), e) y m).

También citó el Reglamento Ambiental para la Acuicultura, D.S. 320, del 14 de Diciembre del año 2001, en su artículo 1, 2, letras b), f) y m), artículo 4, letras b) y c), y artículo 1 transitorio.

Igualmente citó, el artículo transitorio número 1, del D.S. N° 125, del año 2019.

Sostuvo que el acto recurrido consiste precisamente en dejar abandonado un artefacto naval y estructura de fierro, fondeada en un sector respecto del cual no se tiene concesión, sin custodia, lo que en



definitiva constituye la generación de un basural industrial, de un vertedero. Ya que 4 días antes de que le venciera la concesión, fue a instalar –clandestinamente- ese artefacto naval y habiendo vencido el plazo de la concesión, no ha realizado ninguna gestión tendiente al retiro de la misma, pudiendo y teniendo la obligación de hacerlo.

Cita jurisprudencia y doctrina acerca del concepto de “arbitrariedad”, como de la “ilegalidad”, del accionar de la recurrida, sosteniendo que resulta arbitrario e ilegal que no obstante saber el recurrido que la concesión caducaba el 31 de Agosto de 2021, la empresa en forma expresa haya instalado 4 días antes un artefacto naval, y que luego de vencido el plazo del mismo no haya actuado con la misma diligencia para retirarlo.

Sostiene que tales hechos están lejos de constituir una actividad legítima, pues privan a mi persona como pescador, a los pescadores artesanales de la zona y demás residentes de la localidad de Puyuhuapi, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, alterando el orden de la situación jurídica dominante hasta antes de su acción. Quebró el orden de hecho y de derecho desarrollado desde hace años y, en una actitud arbitraria y antojadiza, por la cual supo pretende obtener alguna ventaja económica, ha tomado justicia por propia mano, despojando a la recurrente del ya referido derecho de proteger la indemnidad de su patrimonio. (SIC).

Seguidamente el recurrente alude al principio de proporcionalidad para el evento de conflictos de intereses constitucionales, destacando su derecho a vivir en un ambiente libre de descontaminación.

Reitera conceptos relativos a la arbitrariedad, establecidos jurisprudencialmente.

Seguidamente, el recurrente alude a la violación de su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, citando el número 8, del artículo 19, del Constitución Política del Estado, sosteniendo que el recurrido violó dicho mandato constitucional al restringir derechos o libertades constitucionales al margen de la ley y de esta preceptiva



constitucional al ejecutar actos u omisiones intencionales (dejar abandonado un artefacto naval en un bahía de Puyuhuapi (SIC), ensuciando el ambiente marítimo y estético de la zona, como también poniendo el (sic) riesgo el desarrollo de actividades náuticas y de pesca como se describió anteriormente.

Cita doctrina acerca de la garantía aludida, concluyendo con un resumen de sus alegaciones anteriores.

**SEGUNDO:** Que, evacuando su informe, la recurrente, representada como se anticipó, primeramente sostuvo la inadmisibilidad del recurso de protección deducido en contra de su representada, en atención a lo solicitado por la recurrente en su petitorio en cuanto menciona lesión al derecho de propiedad, igualdad procesal e igualdad ante la ley, las que no se invocaron por la recurrente, no solicitando la actora acoger el recurso respecto de las garantías del número 1 y 8, del artículo 19, de la Constitución Política del Estado, ya que, de acogerse, se estaría actuando de forma ultra petita por este Tribunal, lo que induciría a la inadmisibilidad del recurso.

En relación a la única causal desarrollada por la recurrente, en subsidio, sostuvo que los hechos que se le imputan a su representada se traducen en que ella habría abandonado balsas jaulas en el sector de Puyuhuapi, dando lugar a un vertedero o basurero industrial, habiéndolas instaladas en forma clandestina y que no habría desocupado el centro de cultivo el 1 de Septiembre del año 2021, respecto de todo lo cual, indicó que tales afirmaciones no son ciertas.

Hizo presente que por Resolución N° 1142, del año 1998, se aprobó el proyecto técnico de esa concesión, ubicada en el litoral de Puyuhuapi, para instalar un máximo de jaulas para crianza de salmones y truchas (sic). Concesión otorgada originalmente por Resolución N° 1791, del año 1999 y vigente hasta el día de hoy, número de Sernapesca 110240.

Sostuvo que el artículo 69 de la LGPA, en su inciso tercero, otorga al titular el derecho para paralizar sus operaciones hasta por



dos años sin necesidad de autorización alguna, plazo de suspensión de operaciones que se suspende igualmente por período de descanso o paralización dispuesta por resolución de la autoridad. Habiendo operado esta concesión hasta Junio del año 2013. Y por Resolución Exenta (Pesca) N° 3602 de 2013, hasta el 31 de marzo de 2016, la autoridad dispuso el descanso de esta concesión (junto con varias otras), descanso prorrogado hasta el 31 de marzo del año 2018, por Resolución Exenta N° 5373 del año 2016 y por último, hasta el 31 de Marzo de 2020, por Resolución Exenta N° 2836 del año 2018.

Asimismo, por Resolución Exenta (FFAA) N° 2789 de 2020, se dispuso que los titulares de concesiones de acuicultura podían solicitar una prórroga adicional para retomar sus actividades productivas, por las dificultades e impedimentos derivados de la pandemia de Covid 19, habiéndolo hecho su representada con fecha 15 de Julio del año 2020; por Resolución Exenta N° 1149 del año 2021, se otorgó a su representada un plazo adicional de suspensión de obligaciones de reanudar las operaciones entre el 1 de Julio de 2020 y el 31 de agosto de 2021.

Indicó que en los años 2013, 2018 y 2020, en total, estuvo paralizada por 23 meses, de manera que su representada tiene el deber y el derecho de operar esta concesión a contar del mes de septiembre de 2021, so pena de incurrir en causal de caducidad de la misma.

Por ello el 22 de agosto del año 2021 su representada requirió a la empresa naviera “Walter Clasing” que obtenga autorización de remolque de 4 balsas jaulas desde el centro Sibbad, en isla Trigueña, provincia de Aysén, hasta Puyuhuapi, autorizado por la Capitanía de Puerto Cisnes, por ordinario 12.000/767 de 24 de agosto de 2021, así, el remolque no fue clandestino; asimismo, el Servicio Nacional de Pesca, otorgó el certificado sanitario de movimiento que autoriza el traslado de peces para sembrar en dichas jaulas en Puyuhuapi, lo que demuestra que la instalación de este centro de cultivo es un acto lícito y debidamente autorizado.



El día 26 de agosto del año 2021, se fondean las 4 balsas, con la reacción de la comunidad vecina, no habiendo rendido frutos las reuniones con ellos, se solicitó a la Subsecretaría de las FFAA una prórroga adicional por fuerza mayor, la que le fue concedida por sólo 120 días a contar del 31 de agosto del año 2021, de manera que su representada tiene la obligación de reanudar sus operaciones en esta concesión, antes del vencimiento del plazo dispuesto por la autoridad, así el fondeo de las balsas jaulas no es un acto ilegal ni arbitrario. Las balsas no se abandonaron, el fondeo es el primer paso, luego la instalación de redes y finalmente los peces.

Concluyó con que tiene el derecho a operar un centro de cultivo en el área que le fue concesionada por actos administrativos a firme (año 1999), se le han otorgado las debidas autorizaciones para paralizar sus operaciones desde el año 2013 hasta el presente y tiene, además, el deber de reanudar sus operaciones para no incurrir en causal de caducidad del artículo 142 letra e) de la Ley de Pesca.

**TERCERO:** Que, en consecuencia, los hechos que fundan el recurso consisten en la instalación, por parte de la recurrida, de cuatro balsas jaulas en la bahía de Puyuhuapi, hecho pacífico en el que las partes están contestes.

Difieren en orden a si la concesión acuícola había caducado y a si el traslado de dichas balsas fue o no autorizado y si el recurrido tiene la facultad para operar o no dicho centro de cultivo en tal área.

**CUARTO:** Que, conforme los antecedentes acompañados por las partes, ponderados de conformidad a las normas de la sana crítica, han de tenerse como hechos acreditados, en lo que interesa, que la recurrida es titular de una concesión acuícola otorgada por Resolución Exenta, número 1791, del 30 de Septiembre del año 1999, del Ministerio de Defensa Nacional Subsecretaría de Marina, código de centro de cultivo número 110240, que operaba en el Seno ventisquero, Canal Puyuhuapi, a quien se le autorizo prórroga para reanudar las actividades de la concesión hasta el 31 de Agosto del año 2021.



Que, por resolución de la Capitanía de Puerto Cisnes, se autorizó al REM Ethan Wess 1, para efectuar el remolque de 4 jaulas desde el centro Sibbald Trigueña, hacia el centro ubicado en Puyuhuapi, según Ordinario N° 12.000/767/2021, datado el 24 de Agosto del año 2021.

Asimismo, se acreditó que la recurrente obtuvo certificado sanitario de movimiento, Folio CSM: 00040604, de traslado de trucha arco iris (smolts), para siembra, con destino final a centro de acuicultura de Seno ventisquero, Puyuhuapi, número 110240, en la Comuna de Cisnes, desde el 30 de Agosto y hasta el 16 de Septiembre del año 2021, suscrita por doña Cynthia Pilar Agüero Negrón, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Igualmente se acreditó que con fecha 3 de Septiembre del año 2021, la recurrida, acompañó antecedentes a la Subsecretaría de las FFAA, en relación a solicitud folio 202117850, del 30 de Agosto del año 2021, por la que se solicitó aumento de plazo para reanudar actividades por fuerza mayor en el centro de cultivo en cuestión, atendida la hostil recepción de la comunidad de Puyuhuapi respecto de las actividades de la recurrida en dicho lugar.

**QUINTO:** Que, se ha sostenido, reiteradamente, que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuaciones u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, medida y



meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

**SEXTO:** Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil-, o arbitrario, -esto es, producto del mero capricho de quien lo comete- y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

**SÉPTIMO:** Que, en relación a la solicitud de inadmisibilidad de parte de la recurrida, ésta habrá de ser rechazada, y así se declarará, toda vez que de la lectura total del petitorio del recurso no aparece la incongruencia a que alude la recurrida, según se ha señalado y reproducido en lo expositivo del presente fallo.

**OCTAVO:** Que, de lo relatado por la recurrente, en cuanto a los fundamentos de su recurso, se evidencia que ésta ha incurrido en una confusión conceptual, ya que ha citado como último día de vigencia de la concesión acuícola de la que es titular la recurrida, respecto del centro de cultivo número 110240, como el día 31 de Agosto del año 2021, citando para ello la Resolución Exenta N° 1149, del 5 de Marzo del año 2021, en circunstancias que dicha resolución otorgó a Salmoconcesiones XI Región S.A., una prórroga para reanudar las actividades de la concesión de acuicultura en dicho centro hasta el 31 de Agosto del año 2021, lo que se encuentra avalado, también, por la autorización de movimiento y traslado de peces concedida por el Servicio nacional de Pesca, que establecía como fecha límite hasta el 16 de Septiembre del presente año.

De esta manera, el traslado de las cuatro balsas jaulas, como operación preliminar para reiniciar actividades, instaladas el día 26 de



Agosto del año 2021, en la bahía Puyuhuapi, no fue sino una consecuencia de lo resuelto por la autoridad que establece una obligación para el concesionario, puesto que, de no reanudar sus actividades a partir del 1° de Septiembre del año 2021, la concesión corría el riesgo de ser caducada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 142, letra e), de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

**NOVENO:** Que, no obstante lo precedentemente razonado, encontrándose la materia de autos comprendida dentro de la competencia del Servicio Nacional de Pesca y de la Superintendencia del Medio Ambiente, atendido lo dispuesto por el artículo 38, inciso segundo, no puede dejar de citársele en cuanto prescribe que: *“Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.”*

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, SE DECLARA QUE:

**I.- NO SE HACE LUGAR** a la petición de declaración de inadmisibilidad pedida por la recurrida;

**II.- SE RECHAZA**, el recurso de protección deducido don Luis Aldo Fuentes Altamirano, ya individualizado, en contra de la empresa Salmón Concesiones XI Región S.A., o Salmoconcesiones XI Región S.A., representada como se ha dicho; y,

**III.-** Que, se exime del pago de costas a los comparecientes.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Se deja constancia que no firman la presente sentencia, los Ministros Titulares, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva y don José Ignacio Mora Trujillo, no obstante haber concurrido a la vista de la



causa y presente acuerdo, por encontrarse, la primera, en cometido funcionario y el segundo, con permiso administrativo, de conformidad al artículo 347, del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°: 323-2021.-



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Sergio Fernando Mora V. y Ministro Pedro Alejandro Castro E. Coyhaique, trece de octubre de dos mil veintiuno.

En Coyhaique, a trece de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

